

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

Señor,

Juez Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga - Valle (Reparto)

E.

S.

D.

JOHNY ALEXANDER BERMUDEZ MONSALVE, mayor de edad, vecino de Cali (V), identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderado judicial de los (as) Sres. (as) **Alirio de Jesús Gaviria Núñez, Martha Lucia Gaviria Núñez, Juan Carlos Gaviria Núñez, Alba Teresa Núñez, Hernando de Jesús Gaviria, Elba Doris Núñez García, María Angélica Gaviria Guaitarilla, Mariluz Gaviria Muñoz, Jimmy Flórez Núñez y Samantha Jouser García Gaviria**, personas mayores de edad, vecinos de Buga (V), identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes actúan en nombre propio, a su vez el primero en representación de su hijo menor de edad **Luis Santiago Gaviria Posada**, y serán la parte demandante dentro de la presente, me permito instaurar demanda contra **LA NACION - RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, establecimientos públicos del orden Nacional, quien será la parte demandada, representados por el señor el Director Ejecutivo de la Administración Judicial y el Fiscal General de la Nación, respectivamente, con sede en la ciudad de Buga (V), o por quienes hagan sus veces al momento de la notificación personal; con citación del señor Procurador Judicial de la Corporación y del Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en ejercicio del Medio de Control de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del C.P.A.C.A., para que se hagan las siguientes declaraciones:

I. DECLARACIONES Y CONDENAS.-

PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a **LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, por la responsabilidad en el daño causado a los demandantes, con motivo de la Privación Injusta de la Libertad padecida por **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, el día 6 de diciembre de 2014. Siendo absuelto del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravados, mediante sentencia judicial de primera instancia fechada el día 25 de agosto de 2015 y proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Buga (V).

SEGUNDA: Condenar a **LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, a pagar a favor de los demandantes, todos los perjuicios que han sufrido, consistentes en:

A.- A título de perjuicios morales, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

*Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali – Valle del Cauca*

definitivo, para cada uno de los demandantes, es decir, **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, en calidad de víctima; **Hernando de Jesús Gaviria y Elba Doris Núñez García**, en calidad de padres de la víctima; **Martha Lucia Gaviria Núñez, Juan Carlos Gaviria Núñez, Alba Teresa Núñez, María Angélica Gaviria Guaitarilla, Jimmy Flórez Núñez y Mariluz Gaviria Muñoz**, en calidad de hermanos de la víctima; **Samantha Joster García Gaviria**, en calidad de sobrina de la víctima; y, **Luis Santiago Gaviria Posada**, en calidad de hijo de la víctima.

B.- A título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, para la víctima directa **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, con motivo de la Privación Injusta de la Libertad padecida el día 6 de diciembre de 2014. Siendo absuelto del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, mediante sentencia judicial de primera instancia fechada el día 25 de agosto de 2015 y proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Buga (V). Solicito se liquiden teniendo en cuenta las siguientes pautas:

1.- Un salario de Un Millón de Pesos Mensuales (\$1.000.000,00) que ganaba la víctima en oficios varios antes de ser Privado Injustamente de su Libertad, o lo que se demuestre dentro de la etapa probatoria. En subsidio el salario mínimo mensual legal vigente para el mes de diciembre de 2014, es decir, la suma de Seiscientos Dieciséis Mil Pesos Mensuales (\$616.000,00), más un veinticinco por ciento (25%) de prestaciones sociales. Según las pautas seguidas por el Consejo de Estado, la suma con la cual se liquiden los perjuicios materiales no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente para la fecha en la cual se dicte la sentencia definitiva, o se apruebe el auto que liquide dichos perjuicios.

2.- La vida probable de la víctima según la tabla de supervivencia aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante Resolución No. 0110 del 22 de enero de 2014.

3.- Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el mes de diciembre de 2014 y el que exista cuando se produzca el fallo definitivo.

4.- Las fórmulas matemáticas financieras aceptadas por el Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

C.- A título de daño a la vida de relación, el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o lo máximo establecido por la jurisprudencia al momento del fallo definitivo, para cada uno de los demandantes, es decir, **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, en calidad de víctima; **Hernando de Jesús Gaviria y Elba Doris**

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

*Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca*

Núñez García, en calidad de padres de la víctima; **Martha Lucia Gaviria Núñez, Juan Carlos Gaviria Núñez, Alba Teresa Núñez, María Angélica Gaviria Guaitarilla, Jimmy Flórez Núñez y Mariluz Gaviria Muñoz**, en calidad de hermanos de la víctima; **Samantha Jouster García Gaviria**, en calidad de sobrina de la víctima; y, **Luis Santiago Gaviria Posada**, en calidad de hijo de la víctima. Perjuicios que se configuran por la pérdida de disfrutar el normal desarrollo cotidiano de su vida como todo ciudadano, en compañía de su familia y el resto de la sociedad.

TERCERA: Que las cantidades liquidadas a las cuales se condene a las entidades demandadas, cobren intereses moratorios desde el mismo día en que quede en firme, hasta el día en que efectivamente se produzca el pago de esa condena. Esta solicitud la hago con base en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

CUARTA: LA NACION, por medio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia dictará dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la misma resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, y pagarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF hasta que se haga efectivo el pago.

II. HECHOS SUSTENTO DE LAS PRETENSIONES.-

1.- **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, nació el día 20 de enero de 1968 en el Municipio de San Pedro (V), para la fecha de los hechos contaba con la edad de 46 años.

2.- **Alirio de Jesús Gaviria Núñez** es hijo de **Hernando de Jesús Gaviria y Elba Doris Núñez García**; padre de **Luis Santiago Gaviria Posada**; tío de **Samantha Jouster García Gaviria**; y hermano de **Martha Lucia Gaviria Núñez, Juan Carlos Gaviria Núñez, Alba Teresa Núñez, María Angélica Gaviria Guaitarilla, Jimmy Flórez Núñez y Mariluz Gaviria Muñoz**, en sus registros civiles de nacimiento se evidencia el parentesco.

3.- **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, guarda especiales relaciones de cariño, afecto y ayuda mutua con sus padres, hijo, sobrina y hermanos, propias de un núcleo familiar, con quienes convive bajo el mismo techo en el Municipio de Buga - Valle.

4.- **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, fue privado injustamente de su libertad el día 6 de diciembre de 2014, con orden de captura vigente expedida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buga (V), imponiéndole como medida de aseguramiento detención preventiva por la comisión del hecho punible de

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

*Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali – Valle del Cauca*

abuso sexual con menor de catorce años agravado, estando en prisión por un término de 8 meses y 14 días.

5.- **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, fue absuelto del delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, mediante sentencia judicial de primera instancia No. 106 fechada el día **25 de agosto de 2015**, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Buga (V), que dice:

(..)"RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR NO RESPONSABLE AL SEÑOR ALIRIO DE JESÚS GAVIRIA NIÑEZ, DEL CONCURSO DE DELITOS POR EL CUAL FUE ACUSADO, AL NO ENCONTRAR EN SU CONTRA LA PRUEBA REUNIDA EN SU CONTRA PARA CONDENAR, SEGÚN LAS ARGUMENTACIONES EXPUESTAS EN ESTA SENTENCIA.

(...)"

6.- La privación injusta de la libertad padecida por **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, produce perjuicios morales, materiales en la modalidad de lucro cesante y daño a la vida de relación, tanto para la víctima directa como para su núcleo familiar, ya que, el actuar de las entidades demandadas vulneran su derecho fundamental a la libertad sin tener de presente las falencias en las cuales se basaba la orden de detención judicial. Siendo un hecho que bajo la óptica de la jurisprudencia se ha resuelto bajo las premisas de Error Judicial o Criterio Objetivo, dependiendo del estudio de las pruebas en conjunto.

7.- El hecho que da inicio a este proceso configura la teoría de la responsabilidad objetiva con fundamento en la privación injusta de la libertad, tesis desarrollada ampliamente por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual dice que la exoneración de responsabilidad penal del accionante se produjo mediante decisión en la que se invocó, precisamente, el aludido beneficio de la duda en favor del sindicado, procede la Sala a exponer las razones por las cuales considera que, ante este tipo de eventos, la responsabilidad patrimonial del Estado debe analizarse bajo un título objetivo de imputación basado en el daño especial que se irroga a la víctima. (Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 17 de octubre de 2013 proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez)

8.- En sentencia del 7 de junio de 2012, Radicación No. 25000-23-26-000-1999-01121-01 (22016), actor: María Ilba Lizarazo Álvarez y Otros, C.P. Dra. Olga Melida Valle de La Hoz, Sección Tercera del Consejo de Estado, manifestó en relación con los daños causados con motivo de la privación injusta de la libertad, lo siguiente:

(...)

"2.2. La responsabilidad del Estado en materia de privación injusta.

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.

Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali – Valle del Cauca

En la jurisprudencia de esta Corporación, no existe discusión acerca del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano, por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, ya porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del in dubio pro reo.

Para llegar a éste punto, la Corporación ha adoptado tres posiciones: la primera, “la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial, que se produciría como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso. Por manera que, para su deducción –se dijo-, es irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, es decir que no interesaba averiguar si aquél actuó o no con culpa o dolo”

La segunda, “la carga procesal para el actor de demostrar el carácter injusto de la detención para obtener indemnización de perjuicios, consistente en probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad, fue reducida tan sólo a los casos de detención diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal porque, en relación con estos últimos, se estimó que en los tres eventos allí señalados la ley calificó que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados”

La tercera, “...el carácter de injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y que, por consiguiente, frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resulta indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado –se dijo- no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo”

Respecto de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la detención preventiva ordenada con el lleno de los requisitos legales, cuando posteriormente se exime de responsabilidad al sindicado, la sentencia comentada dijo: “No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad –como en el presente caso- durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea posible deducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de Administración de Justicia del Estado”. (...)

Alirio de Jesús Gaviria Núñez, no tiene la obligación de soportar el daño producido por la privación injusta de su libertad, toda vez que no cometió ninguna actividad ilícita, ni hacia parte de ninguna organización criminal, viéndose involucrado en un proceso penal con errores en su investigación, padeciendo perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación. Daño que demuestra un desequilibrio de igualdad de las cargas públicas a consecuencia de la morosidad judicial en la investigación penal por parte de

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali – Valle del Cauca

las entidades demandadas, configurando error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996 dispone: *Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios...*

9.- En documento final aprobado mediante Acta del 28 de agosto de 2014 referentes para la reparación de perjuicios inmateriales del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25 de septiembre de 2013 con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de los perjuicios inmateriales, establece al respecto:

“(...) 2.3 REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

En los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo - Rad. No. 25.022, y se complementan los criterios allí adoptados, de acuerdo con la evolución jurisprudencial de La Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad	Víctima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidad	Parientes en el 2º de consanguinidad	Parientes en el 3º de consanguinidad	Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2º	Terceros damnificados
Término de privación injusta		50% del Porcentaje de la Víctima directa	35% del Porcentaje de la Víctima directa	25% del Porcentaje de la Víctima directa	15% del Porcentaje de la Víctima directa
en meses	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV
Superior a 18 meses	100	50	35	25	15
Superior a 12 e inferior a 18	90	45	31,5	22,5	13,5
Superior a 9 e inferior a 12	80	40	28	20	12
Superior a 6 e inferior a 9	70	35	24,5	17,5	10,5
Superior a 3 e inferior a 6	50	25	17,5	12,5	7,5
Superior a 1 e inferior a 3	35	17,5	12,25	8,75	5,25
Igual e inferior a 1	15	7,5	5,25	3,75	2,25

10.- Favor aplicar el Principio IURA NOVIT CURIA.- Aplicación en procesos de responsabilidad. *“Debe señalarse que en virtud del principio iura novit curia, el juez está facultado para adecuar un régimen de responsabilidad diferente al aducido en la demanda, sin que con ello se estén modificando los fundamentos fácticos de las pretensiones; así lo precisó la Sala Plena de la Corporación en sentencia S-123 del 14 de febrero de 1995: “ De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la Administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es el caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de*

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

derecho invocados por el demandante..." (Responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda...)

11.- El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia dice: *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."* En este caso, se produjo un daño antijurídico a la víctima y sus familiares quienes no están en la obligación legal de soportarlo.

12.- La responsabilidad de la administración ha producido muchos daños a los demandantes. En relación a la tasación de los perjuicios se debe tener en cuenta el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que consagra tres (3) criterios, el de la reparación integral del daño, la equidad y los criterios actuariales para que la condena no pierda su valor.

13.- **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, sus padres, hijo, hermanos y sobrina, han sufrido mucho moralmente por daños y perjuicios ocasionados, el primero por tener que soportarlas, y los segundos por que entre ellos existen muy buenas relaciones de cariño, afecto y ayuda mutua, además viven en la misma casa, por ello solicito como pretensiones de la solicitud de demanda el equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.

14.- En las pretensiones de la demanda se ha pedido el pago del equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como daño a la vida de relación, para **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, sus padres, hijo, hermanos y sobrina. Perjuicios que se configuran por la pérdida de disfrutar el normal desarrollo cotidiano de su vida como todo ciudadano, en compañía de su familia y el resto de la sociedad.

15.- **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, sufre enormes perjuicios materiales, por lo que la privación injusta de la libertad le impidió laborar y ayudar a su núcleo familiar.

16.- Existe una relación de causalidad entre la actuación de la administración y el daño causado a los demandantes.

17.- Se cumplió con lo normado en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, donde la Procuraduría 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos en Buga (V), expidió certificación por falta de acuerdo conciliatorio.

18.- Los demandantes me confirieron poder para actuar.

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

*Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali – Valle del Cauca*

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES.-

Invoco como fundamentos de derecho las siguientes disposiciones.

Los artículos 2, 6, 13, 28, 29 y 90 de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 68 de la Ley 270 de 1996

Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal

Los artículos 16, 23 y 31 de la Ley 446 de 1998.

Los artículos 140, 155, 156, 157, 161, 164, y del 179 al 187 del nuevo Código Contencioso Administrativo, y demás normas concordantes o complementarias.

IV. P R U E B A S.-

1.- DOCUMENTALES QUE SE ACOMPAÑAN JUNTO CON LA DEMANDA.

- a) Poderes conferidos por los demandantes para instaurar la presente demanda.
- b) Copia autentica de los registros civiles de nacimiento de los demandantes.
- c) Copia del Acta de Audiencia del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buga (V).
- d) Copia de solicitud de Audiencia Preliminar.
- e) Copia de control a las audiencias preliminares.
- f) Copia de constancia expedida por la Fiscal Octava Seccional URI
- g) Copia el Acta de Audiencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Buga (V).
- h) Copia de derecho de petición radicado ante el INPEC de Buga (V).
- i) Copia de derecho de petición radicado ante el Centro de Servicios Judiciales – Sistema Penal Acusatorio – Buga (V).
- j) Respuesta al derecho de petición con sus respectivos anexos:
 - Cartilla Biográfica del Interno.
- k) Constancia expedida por el Sr. Procurador 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos en Buga (V), para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por agotamiento del requisito de procedibilidad por no existir acuerdo conciliatorio.

2.- DOCUMENTALES POR MEDIO DE OFICIO.

A.- Que se libre oficio al Señor Juez Segundo Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento de Buga (V), con sede en el Palacio de Justicia de ese municipio, para que envíe a su despacho copia autentica y completa del expediente penal radicados bajo el No. 76-111-60-00-165-2013-01245 , imputado **Alirio de Jesús Gaviria Núñez.**

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

*Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali – Valle del Cauca*

B.- Que se libre oficio al Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano a Cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con sede en el Municipio de Buga (V), para que envíe a su despacho certificación donde se indique el tiempo en que el demandante **Alirio de Jesús Gaviria Núñez** tardaría en conseguir un empleo como oficios varios después de haber salido de la cárcel.

Me reservo el derecho de aportar las contestaciones de los oficios, antes o después de que sean elaborados.

3.- PRUEBA PERICIAL.

Examen médico – legal a **Alirio de Jesús Gaviria Núñez**, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de un psicólogo o psiquiatra adscrito a esa institución, para ser valorado como consecuencia a los hechos vividos en reclusión por la privación injusta de la libertad, acto que le ocasiono daños psicológicos y cambio en su comportamiento social.

V. ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA.-

Estimo la cuantía a la fecha de la presentación de la demanda, en menos de Cincuenta y Cinco Millones de Pesos Moneda Corriente (\$55.000.000.00), porque según el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, la cuantía para efectos de competencia se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen.

La demanda será de un proceso de PRIMERA INSTANCIA.

VI. COMPETENCIA.-

Según el artículo 156, numeral 6º, en los asuntos de Reparación Directa la competencia por razón del territorio se determinará por el lugar de los hechos o por el domicilio principal del demandado a elección del demandante.

Con base en lo anterior, es competente el Juez Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga (V), por cuanto los hechos acontecieron en jurisdicción de ese Municipio.

J.A. Bermúdez M. Abogados Asociados S.A.S.
Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional

Carrera 4ª No. 10 - 44 Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo
Teléfono: 3395003 Celular: 3165239179
Correo Electrónico: jabm755@yahoo.es
Santiago de Cali - Valle del Cauca

VII. NOTIFICACIONES.-

- **A LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL**, se le puede notificar por medio del Director Ejecutivo de la Administración Judicial con sede en la ciudad de Buga (V), según el artículo 23 de la Ley 446 de 1998.

- **A LA NACIÓN - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, se le puede notificar por medio del Fiscal Seccional, con sede en la ciudad de Buga (V), según el artículo 23 de la Ley 446 de 1998.

- **A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION**, se le puede notificar por medio de su Director, con sede en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 7ª No. 75- 66, Piso 2, Centro Empresarial C75, o por medio del correo electrónico procesos@defensajuridica.gov.co

- **A los demandantes** en la Calle 22 # 18A-21 del Municipio de Buga (V).

- **Al suscrito** puede ser notificado en la Carrera 4ª No. 10 - 44, Oficina 913 Edificio Plaza de Caicedo de la ciudad de Cali (V). Teléfono: 3395003, Celular 3165239179. O por medio de correo electrónico jabm755@yahoo.es

VIII. ANEXOS.-

Todos y cada uno de los documentos enunciados en el acápite de pruebas, con copia para el traslado a los demandados, Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación con sus respectivos anexos, y una copia para el archivo del Juzgado, tanto escrita como en CD.

IX. SUSTITUCION DE PODER.-

Dentro del presente caso, me permito sustituirle poder al Doctor Andrés Felipe Posso Arana, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.481.680 de Buga (V), portador de la T.P. No. 244.618 del C.S. de la Judicatura, en los mismos términos de los poderes a mi conferido por los demandantes.

Del señor Juez, atentamente,

JOHNY ALEXANDER BERMUDEZ M.
C.C. No. 16.511.335 de Buenaventura (V)
T.P. No. 133.160 del C. S. de la Judicatura